

Cristina, el campo y algo más

El conflicto del gobierno con el campo abrió un debate nacional que todavía sigue. Porque más allá de los puntos específicos reivindicativos de los productores agropecuarios, se abordaron otros aspectos que están relacionados con las cuentas pendientes del gobierno nacional, como es la distribución de las riquezas, y en definitiva el proyecto de país que es posible construir en la etapa actual.

Algunos plantearon la pelea de la Presidenta Cristina con el campo en términos absolutos, en tonos de blanco o negro. El que apoyaba al gobierno nacional aparecía como reivindicador de un estilo político patoteril, propio del "peronismo". Y el que no lo apoyaba era partidario de la "oligarquía rural". Así pareció incluso que intentó instalarlo la Presidenta, en uno de sus primeros discursos, que tuvo aristas de soberbia. Las manifestaciones en la calle se plantearon casi en los mismos términos: las cacerolas impecables de algunas señoras apoyando al campo y los golpes de puño de algunos adictos al gobierno indicaron dos extremos de la pelea instalada. El paso de los días posibilitó un abordaje más reflexivo e integral. Aparecieron cifras y opiniones de todo tipo. Cada una seguramente con algo de verdad. Pero ninguna como única ni exclusiva. Porque los números y las estadísticas, como las encuestas, pueden manipularse. Pero las realidades nacionales de vergonzosos contrastes de miseria y opulencia son indisimulables. Y aunque las soluciones mágicas no existen, los criterios de análisis deben mantener la prioridad en la lucha por la calidad de vida de las mayorías empobrecidas.

Para no repetir un esquema reduccionista ni simplista nos limitaremos a señalar algunos aspectos del debate. La protesta agraria se originó en la resolución del Ministro de Economía modificando el sistema impositivo sobre las retenciones a las exportaciones. Este impuesto no coparticipable a las provincias sobre la producción del campo le permite al gobierno nacional disponer de una importante cantidad de recursos con los que se vienen abordando distintas políticas públicas. El carácter no coparticipable ha generado críticas por el manejo discrecional de los fondos por parte del poder ejecutivo nacional. Así se genera la dependencia de los gobernadores, que se ven obligados a tener una relación con el poder central que afecta las autonomías provinciales. Y no se trata de sostener un federalismo trasnochado, sino impulsor de mayores niveles de participación tanto en lo político como en lo económico y cultural. Porque en esa mayor igualdad terri-

torial, aún en su diversidad, se consolida la institucionalidad democrática necesaria para la vigencia de la justicia social en todo el país. Las provincias necesitan fortalecer sus mecanismos de participación política y sus propias construcciones sociales. Y todo ello no es bueno hacerlo desde la uniformidad que riesgosamente puede plantear un hegemonismo derivado del modo de distribución centralista de recursos.

Pero además este manejo en la asignación de recursos fomenta un modo de construcción política con fuertes rasgos clientelista. Porque si bien permite aliviar situaciones a los sectores más empobrecidos o contribuir a sostener de algún modo niveles de organización popular, también establece una dependencia política que es el sustento de un modo de construcción clientelar. Por cierto que la distribución de estos recursos ha estado muy ligada a la concentración poblacional. Que se subsidie el transporte público en el Gran Buenos Aires donde se concentra un tercio de la población del país no está mal. Se está ejecutando un tipo de distribución. Pero también en las provincias más alejadas, como Formosa, Chaco o Jujuy, existen familias muy necesitadas de lo más elemental, que no por ser numéricamente menos importante, deben seguir excluidas de esa distribución. Es probable que en estos lugares algunos recursos hayan sido enviados a través de canales político-institucionales que luego hacen también un uso clientelar de los mismos. Pero algunas urgencias en salud, vivienda o educación no admiten demasiada pureza en el análisis. Hay una distribución más equitativa que exige una presencia más federal del gobierno nacional. Y en todo caso, mejores mecanismos de control para evitar la corrupción intermediaria.

El poder ejecutivo nacional debe cumplir con su rol integrador de las diferentes realidades económicas y sociales del ancho, largo, desigual y polifacético país que tenemos. No lo puede hacer alimentando la deformación macrocefálica que ya padecemos. Debe promover el desarrollo de las economías regionales. Y esto necesita de un régimen político en las provincias que esté sustentado en la activa participación de los propios actores sociales y no condicionados por un modo centralista de distribución de los recursos económicos. También para combatir el sistema político-económico feudal existente especialmente en las provincias más empobrecidas.

Atrás de los productores rurales se enfilaron ope-

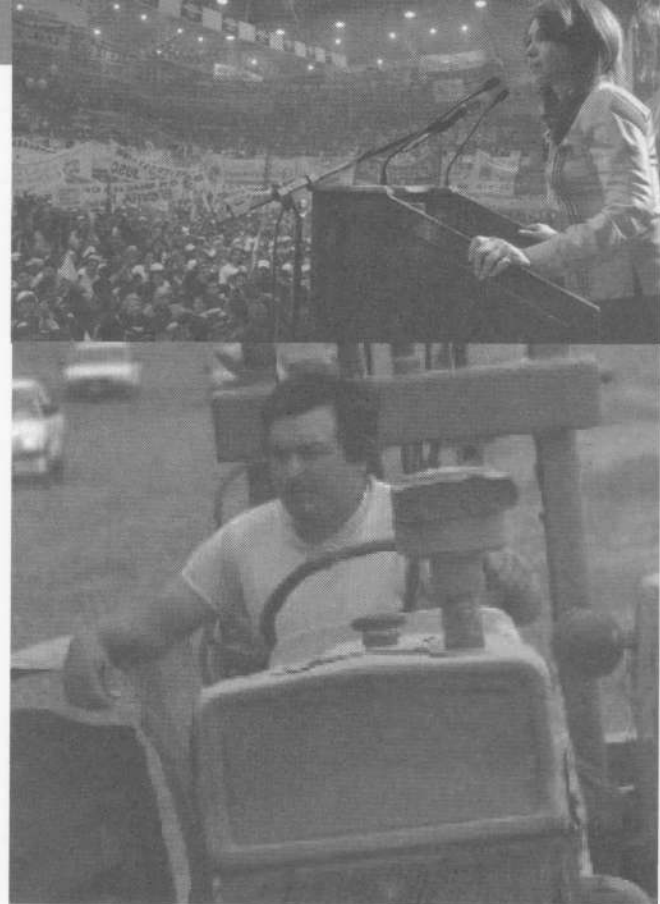
instancias de diálogo con una agenda de temas relacionados a la política agropecuaria, que no sólo aportará a soluciones, sino que brindará la oportunidad de establecer políticas que además del aprovechamiento de los recursos naturales y las potencialidades alimentarias, permita establecer medidas de protección ecológica, en la restitución de los bosques, la protección de las aguas y el control sobre la explotación minera.

La prolongación en el tiempo tuvo un aspecto positivo al instalar un tema en gran medida desconocido por buena parte de la sociedad. Y no menos importante ya que el campo es hoy la fuente principal de recursos, aunque con limitaciones al no ser el sector que más empleo genera. Sin embargo a partir de una correcta planificación sobre la utilización de estos recursos, con inversiones industriales en infraestructura, maquinarias y otros productos relacionados, así como la promoción de la industria alimenticia, debe generarse la creación de empleo, que todavía sigue siendo un reclamo para la dignidad de la vida de los pobres, que no pueden continuar dependiendo de la dádiva del subsidio o de políticas sociales que corren el riesgo de manipularse para el clientelismo político.

El conflicto con el campo tuvo también un efecto negativo al afectar la provisión de alimentos a la población, dando lugar a una inescrupulosa especulación, que acarrió el aumento de precios en los comestibles de mayor consumo en la población, sin que las medidas del gobierno hayan resultado eficaces para retrotraer la situación. Debe recordarse de todos modos que el manejo artificial de la inflación por parte del gobierno desde mucho tiempo antes de este conflicto ya venía expresándose en el aumento de los precios, no siempre acompañados de aumentos en los salarios.

Algo más que el campo fue el problema que debió encarar el gobierno de Cristina. Y algo más que los propios intereses descubrieron los productores agropecuarios, al instalarse en la escena nacional con un fuerte protagonismo. Porque la temática involucró los intereses de otros, a los que ellos no pueden seguir ignorando. Y el gobierno tuvo la posibilidad de avanzar en una orientación que todavía necesita de medidas más concretas y eficaces para conciliar lo conciliable y desde ese piso asegurar un nivel de dignidad a los más empobrecidos. ¡Ojalá se haya aprendido la lección sobre la responsabilidad mayor que tienen los que más tienen, tanto sea poder de decisión para redistribuir, como poder de acumulación para compartir!. Pero, no para la dádiva, sino para la justicia social.

Córdoba, abril de 2008
Luis Miguel Baronetto



sitores al gobierno de distinto pelaje. Los que legítimamente reclaman mayores espacios de pluralidad y debate político, hasta los que aprovechándose mezquinamente de este conflicto cuestionaron la política de derechos humanos, los avances en la reactivación del empleo o de integración latinoamericana que se viene impulsando en continuidad desde la anterior gestión kirchnerista. Una mezcla de intereses diversos, tanto económicos como políticos, confluyeron para criticar al gobierno de la Sra. de Kirchner.

Y la Presidenta mejoró su actitud ante el conflicto abriendo instancias de negociación. Aprendió que no podía manejarse sólo con la retórica del discurso, que sirvió para “emblocar” a los distintos sectores del campo, ignorando las diferencias entre los pequeños y medianos productores y las concentradas empresas agroexportadoras pertenecientes a familias de la vieja oligarquía hoy asociada al capital financiero transnacional. Y también una ancha franja de productores rurales con relativo poder económico, según la zona productiva del país donde estén instalados. Esta realidad debe considerarse. Los cortes de rutas fueron masivos y extendidos en toda la geografía nacional. Y si bien fueron denostados por la exhibición de cierto poder económico, en camionetas y tractores, no podía tratarse de igual manera al pequeño productor que a las empresas agrofinancieras, conectoras del campo sólo por computadoras y que pusieron como fuerza de choque a sus empleados. El curso de los acontecimientos sin embargo posibilitó encauzar de mejor modo el conflicto. Y se abrieron